

me al decreto de amnistía de 27 de Julio del año pasado, por no estar comprendido en esta ley, con cuya resolución se ha violado en concepto del quejoso, las garantías que otorgan los artículos 13 y 18 de la Constitución federal, no habiendo cometido mas delito, segun manifiesta, que el político de servir en varias fuerzas de pronunciados, y considerando: que Francisco Perez fué condenado á la pena de muerte como saltador de caminos, conforme á la ley de 9 de Abril de 1870, absolviéndole al mismo tiempo del delito político de rebelion, segun se declara expresamente en la sentencia poronunciada en 13 de Noviembre de 1870 por el Teniente coronel Cecilio Estrada, que instruyó el proceso como jefe de la fuerza que aprehendió al reo, y que habiendo solicitado indulto de esa pena, le fué conmutada en la mayor extraordinaria de prision que actualmente está extinguiendo. Que el Gefe político de Salamanca, en virtud de este fallo, no puede haber dictado otra resolución á la solicitud del quejoso para que se le pusiera en libertad; que la dictó negándose á acceder á lo pedido, pues la ley no le concedia facultad alguna para revisar y revocar la sentencia que condenó á Perez como saltador, y declarar que no era reo sino del Orden político, y que habia habido violacion de garantías al ser juzgado por leyes privativas y por un Tribunal especial.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato en 27 de Junio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Perez, contra la providencia que dictó el Gefe del Partido de Salamanca en 8 de Agosto del próximo pasado, negándose á poner en libertad al quejoso, por no reputarlo comprendido en la ley de amnistía de 27 de Julio del mismo año.

Devuélvase las acutaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompa-

ñándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 12 de Noviembre de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por Dª Carolina Slocum, contra los procedimientos del Juzgado de 1ª instancia de Tlalpam, en el juicio hipotecario que sigue dicho juzgado contra la interesada, por violacion de garantías.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Setiembre 30 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Dª Carolina Slocum, á virtud de reputar violada en su persona con los procedimientos del Juzgado de 1ª instancia de Tlalpam en el juicio hipotecario que ante el mismo se sigue, la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución; visto el informe del C. Juez de Tlalpam; lo pedido por la parte fiscal, y visto en fin lo que verse debía, y considerando: que segun las constancias respectivas, aparece: que á la parte quejosa se le hace aplicacion de dicha ley que es posterior, resultando de ello contravencion al artículo 14 constitucional, por razon de la

retroactividad, pues como expresa Escrib. Dic. de Leg. pal. efec. retroac. par. 2º, los derechos que resultan de los contratos, ora sean actuales y efectivos, ora sean solo espectativos y eventuales, estan así mismo fuera del alcance de toda ley posterior; y considerando segundo: que si bien el escrito cuya copia adjunta á su informe, el Juzgado de Tlalpam parece indicar que la parte quejosa estuvo conforme en los términos y procedimientos para el remate, hay que advertir, que segun el conteste de dicho escrito, mas bien lo pedido por la Señora Slocum, fué el que no se aprobara la adjudicacion en pago solicitado por el acreedor, y se observase lo prevenido al caso por el código de procedimientos; mas no que se consintiese en las deducciones que dicho código establece; y teniendo por último presente, la esacta conexion que las disposiciones del código de procedimientos en materia de remates tiene con la naturaleza de los contratos, de tal suerte, que es indudable se efectuó la retroactividad á que se contrae el artículo 14 constitucional cuando se aplican á contratos anteriores.

Por tales razones, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Carolina Slocum, contra los procedimientos del Juzgado de 1ª instancia de Tlalpam, en cuanto á los términos del remate de la finca llamada el "Hotel," por efectuarse con ello en el caso, violacion del artículo 14 de la Constitucion. Hágase saber; publíquese por los periódicos y previa citacion fiscal, elévense estos autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo.—*José María Canalizo.*—*Fernando Zamora*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 10 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta ciudad por Dª

Carolina Slocum, contra los procedimientos del Juzgado de 1ª instancia de Tlalpam, en el juicio hipotecario que sigue dicho Juzgado contra la interesada, á consecuencia de la demanda que le tiene promovida D. Cleofas M. Benitez, y cuyos procedimientos segun la quejosa, vulneran en su persona la garantía que protege el artículo 14 de la Constitucion federal, y considerando: que segun las constancias respectivas, aparece: que el contrato en virtud del cual demanda Benitez á la Señora Slocum, es anterior al Código de procedimientos civiles, de lo que resulta, que se dá á este un efecto retroactivo. Considerando: que si en el escrito de la Señora Slocum, inserto en el informe del Juzgado de Tlalpam, se indica que la parte quejosa estuvo alguna vez conforme en los términos y procedimientos para el remate de la finca que persigue el acreedor, segun el conteste de dicho escrito aparece mas bien que la Señora pidió que no se aprobase la adjudicacion en pago solicitado por el acreedor y se observase lo prevenido en el Código de procedimientos, mas no que consintiera en las deducciones que este Código establece. Considerando ademas, la exacta conexion que las disposiciones del Código de procedimientos tienen en materia de remates con la naturaleza de los contratos, de modo que no puede dudarse que se efectua la retroactividad que prohíbe el artículo 14 constitucional, cuando se aplican á contratos anteriores.

De conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitucion federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 30 de Setiembre próximo pasado por el Juez 2º de Distrito de esta ciudad, que declara: que la Justicia federal ampara y protege á Dª Carolina Slocum, contra los procedimientos del Juzgado de 1ª instancia de Tlalpam, en cuanto á los términos del remate de la finca llamada "El Hotel," por efectuarse con ello en el caso, la violacion del artículo 14 de la Constitucion.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias. Pedro Ogazon. Juan J. de la Garza. José M. Lozano. José Arteaga. P. Ordoz. M. de Castañeda y Nájera. José M. del Castillo Velasco. M. Auza. Simon Guzman. L. Velasquez. M. Zavala. José García Ramírez. Ignacio M. Altamirano. Luis Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, 17 de Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Martin Banda y Secundino Arteaga, contra los procedimientos del Gefe político de Celaya, que los juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo contra salteadores y plagiarios, condenándolos á muerte con infruccion de los artículos 13 y 20 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: en 4 de Marzo último, Secundino Arteaga y Martin Banda interpusieron el recurso de amparo, contra los procedimientos de la Gefatura política de Celaya, que condenándolos como salteadores los juzgó segun la ley de 18 de Mayo de 1871, y los condenó á la pena de muerte, de la cual fueron indultados por el Congreso del Estado, quedando conmutada

TOMO V.—PARTE II.

en la de prision que actualmente estan sufriendo.

Fundan su queja en las garantías individuales consignadas en el artículo 20 de la Constitucion, federal que en su concepto se han violado en sus personas, y niegan la competencia de la Gefatura política de Celaya para juzgarlos y sentenciarlos, por no haber resultado probado otro hecho en la causa que se les formó, que la posesion de algunos objetos robados, cuya legítima adquisicion no les fué posible justificar.

La autoridad ejecutora del acto reclamado, al rendir el informe de que habla el artículo 90 de la ley de 20 de Enero de 1869, manifestó: que los quejosos no gozaban de las garantías que habian invocado, por que eran reos del delito de robo con asalto segun las pruebas del acta que habian instruido, comprendidos en consecuencia en la ley de 18 de Mayo de 1871, que en su artículo 1º entre otras garantías individuales, suspendió las concedidas en el artículo 20 de la Constitucion para los salteadores y plagiarios; y como á este informe no se acompañó ningun justificante, fué necesario recibir el juicio á prueba, y pasado este término, por equidad se pidió la causa instruida por la Gefatura política de Celaya contra los quejosos, que en testimonio obra en estas actuaciones, como tambien el parecer del C. Fiscal 2º del Supremo Tribunal del Estado, sobre peticion de indulto hecha por Secundino Arteaga y Martin Banda.

Para resolver en el presente caso, si debe concederse el amparo que se solicita, es necesario examinar si los quejosos estan comprendidos en la ley de suspension de garantías que se ha citado, por haber resultado en el acta que se instruyó contra ellos, pruebas bastantes de ser ellos los autores del robo con asalto que se les atribuye. La ley de 18 de Mayo de 1861, supone para su aplicacion la prueba jurídica de la existencia del delito y de la delincuencia del procesado: sobre este punto el Promotor fiscal que suscribe está conforme con la opi-